

El entorno de los presos de ETA pide al PSE «una actitud proactiva» para su excarcelación

El Gobierno Vasco ha concedido 32 terceros grados a reclusos de la banda terrorista durante el último año y seis han sido recurridos por Fiscalía

ANDER BALANZATEGI

SAN SEBASTIÁN. La consejería de Justicia del Gobierno Vasco ha cambiado esta legislatura de color político, pasando a manos de la socialista María Jesús San José, tras la gestión de la jeltzale Nerea Melgosa. Una modificación que ve como una oportunidad la red ciudadana de apoyo a los presos de ETA Sare, ya que considera que la Administración Penitenciaria vasca dispone de «mejores condiciones para desarrollar sus funciones que las existentes en 2021—entonces dirigida por Beatriz Artolazabal hasta dejar el cargo en 2023—». En este sentido, Sare pidió al nuevo Ejecutivo que tenga «una actitud proactiva, siempre dentro de los límites legales, frente a las limitaciones establecidas en las leyes de excepción» y que busque «soluciones creativas» para la excarcelación de los presos.

Sare ofreció ayer los datos anuales y la valoración de la situación de los reclusos de ETA. Joseba Azkarraga y Nahikari Iturbe, portavoces de la plataforma, señalaron que, a día de hoy, 148 presos y presas se encuentran bajo custodia en centros penitenciarios de España y Francia. De estos, 126 son hombres y 22 mujeres. La mayoría, 142, están en cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, mientras que 6 se encuentran en prisiones del Estado Francés.

En cuanto a la evolución de la política penitenciaria, durante el periodo comprendido entre agosto de 2023 y el mismo mes de 2024, Sare puso especial atención en las decisiones adoptadas por



Manifestación de la red ciudadana Sare durante la Aste Nagusia de Donostia. SARA SANTOS

la Viceconsejería de Justicia del Gobierno Vasco. En particular, han revisado las propuestas de progresión de grado de los presos. Así, explicaron que las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios de Euskadi han propuesto un total de 34 progresiones a tercer grado, de las cuales 32 han sido aprobadas. En todo caso, recordaron que el Ministerio Fiscal ha recurrido 6 de estas progresiones, logrando la suspensión del tercer grado en 5 casos, con el regreso provisional de los presos a prisión mientras el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria (JCV) se pronuncia.

El número de recursos presentados por el Ministerio Fiscal en

este periodo, según relataron los portavoces de la plataforma, «se ha reducido en relación al pasado año, pero aún está muy alejado del 3% de los recursos que presenta la Fiscalía del País Vasco, en aquellos casos no relacionados con presos de ETA». En cuanto a los reclusos de edad avanzada, Sare criticó la falta de progresiones para su excarcelación. A pesar de que la ley permite el acceso anticipado al tercer grado para presos mayores de 70 años, «varios de ellos siguen en prisión con condiciones de salud delicadas».

Ante esta situación, los representantes de Sare exigieron a la nueva administración que ponga fin a estas medidas de «excep-

cionalidad, en una época en la que no cabe alegar amenaza alguna, dando paso así a los mecanismos integradores y humanistas de la Justicia ordinaria. No se puede construir un país dando la espalda a los derechos de las personas, porque, de esta forma, estaremos cerrando en falso una época trágica de nuestra historia».

También pidieron a la consejería controlada ahora por los socialistas que su política «profundice en el avance de este Modelo Penitenciario Vasco, que, debe recordarse, no es una opción partidaria sino una apuesta del conjunto de la sociedad vasca, ratificada por el Parlamento Vasco».

Y para ello Sare abogó por el diseño y aprobación, lo antes posible, de la estabilización de condiciones laborales para una plantilla dimensionada de acuerdo con las necesidades, y una dotación presupuestaria anual adecuada.

«Enroque judicial»

Los recursos de la Fiscalía preocupan a Sare y explicaron que «un enroque judicial que vulnera los derechos» de los presos, «no ayuda para nada a mitigar el dolor» de las víctimas. Asimismo, les «resulta difícil de entender todo esto, cuando estamos hablando de presos con muchos años de condena cumplidos y per-

«El dolor de las víctimas se mitiga con la deslegitimación de la violencia»

La Fundación Buesa critica que Sare trate «acriticamente a quienes asesinaron, secuestraron, hirieron y extorsionaron»

A. BALANZATEGI

SAN SEBASTIÁN. La comparecencia de la plataforma ciudadana Sare fue respondida casi inmediatamente por la Fundación Buesa, que recriminó al grupo de apoyo a los presos de ETA que es «in-

justo e inadmisibles que tratéis acriticamente a quienes asesinaron, secuestraron, hirieron y extorsionaron. ETA no fue una «organización», fue una banda terrorista». Y se preguntaron si una vez los reclusos salgan a la calle, «serán conscientes del daño que

causaron o si se les moverá algo por dentro al pensar» lo que hicieron.

La fundación que fue creada en recuerdo del exdirigente del Partido Socialista de Euskadi Fernando Buesa, publicó a través de su red social X que «anhelamos encontrar en los presos de ETA un rastro de humanidad, una muestra de empatía, un mensaje de rectificación, un gesto de arrepentimiento». Algo que según expresaron, «más allá de las palabras impersonales y medidas, llegue desde la cercanía emo-

cional, desde la honestidad y la sinceridad».

Si bien la plataforma en apoyo a los presos de la banda terrorista había señalado en rueda de prensa que «vulnerar los derechos» de los reclusos «no ayuda a mitigar» el dolor de las víctimas, la Fundación Buesa quiso responder a esto. «No os equivocáis: lo que verdaderamente puede mitigar el dolor a muchas víctimas de ETA pasa inexorablemente por la justicia y la verdad (todavía hay más de 300 casos sin resolver) y, sin lugar a dudas, también por la

LAS CLAVES

NUEVO GOBIERNO

La plataforma pide a la Consejería que acabe con la política penitenciaria de «excepción»

CONVIVENCIA

Sare cree que «vulnerar los derechos» de los presos «no ayuda a mitigar el dolor» de las víctimas

tenecientes a una organización que desapareció hace más de seis años». Además, recordaron, «el fin de la violencia se produjo hace más de 13 años y en muchos casos, los hechos por los que estos presos cumplen condena ocurrieron en la década de los 90 del siglo pasado».

Azkarraga e Iturbe también insistieron en que «tanto en el caso de aquellos que recuperaron su libertad tras el cumplimiento íntegro de su condena en primer o segundo grado, sin acceso al exterior ninguno, como en el caso de aquellos otros que han ido cumpliendo sus condenas en régimen de semilibertad o libertad condicional, el porcentaje de reincidencia es, prácticamente, cero».

La plataforma de apoyo a los presos quiso «hacer constar que la relación que ha existido entre la red ciudadana SARE y el Departamento de Justicia ha sido positiva, normalizada». Así, añadieron que «se nos ha escuchado, aunque en ocasiones nuestras demandas no hayan tenido una respuesta positiva. Pero siempre hemos considerado que asociaciones como la nuestra, aunque trabajamos en el ámbito de lo político, no nos disputamos ese espacio». Aseguraron que han actuado siempre «con lealtad», y agradecieron las labores de sus interlocutores.

deslegitimación ética, social y política de la violencia terrorista por aquellos que la ejercieron y la apoyaron». La fundación apuntó que «ni la justicia es venganza ni la impunidad el camino hacia la convivencia».

Durante las últimas semanas otros colectivos de víctimas como Covite han denunciado hasta 71 actos de apoyo a ETA en las fiestas de Euskadi y Navarra. El Colectivo alertó de que en 25 de esos actos han sido directamente las instituciones públicas —ayuntamientos gobernados por Bildu—.



SAN SEBASTIÁN. El debate del futuro estatus de autogobierno de Euskadi volverá por sus fueros este otoño aunque previsiblemente lo hará en modo ligh, bajo en calorías. En una coyuntura en la que a nadie se le escapa que las posiciones más independentistas se han enfriado en las encuestas y el apoyo a la secesión ha caído a mínimos históricos frente al interés de los temas sociales, de las «cosas del comer», de la sanidad, la vivienda y la seguridad. La identidad empieza a vivir de una forma diferente y ha dejado de ser el caballo de batalla. Por ahora.

PNV y EH Bildu ensayan ya posiciones para que en otoño el debate sobre la reforma del Estatuto vuelva al centro del escenario, aunque sin la estridencia del pasado. El procés catalán ha dejado unas cuantas enseñanzas y los nacionalistas vascos no van a repetir esos errores ni a minusvalorar la capacidad del Estado de metabolizar la presión soberanista. La izquierda independentista quiere reactivar la ponencia parlamentaria y aprovechar la mayoría nacionalista para «mover» al PSE. Los jeltzales, más cautos, preparan una ronda discreta para sondear posiciones y esperar a que se culmine el Estanper de Gernika para escenificar

El debate del estatus volverá bajo en calorías

Nuevo ciclo. PNV y EH Bildu templan el acento de sus tesis soberanistas para atraer al PSE a la negociación de un nuevo marco de autogobierno



ALBERTO SURIO

el final de ciclo. Todo está abierto. El eje derecha-izquierda ha ganado posiciones pero sin diluir el factor nacional. Y los peneuvistas no están dispuestos a regalar a EH Bildu la bandera de la soberanía. Aunque ello les obligue a moverse en la cuerda floja y a hacer encajes de bolillos.

El telón de fondo de esta obra obedece a un guión previsible. El PSE quiere un debate de bajo perfil, porque es radicalmente con-

trario a desbordar la Constitución con una aventura que ponga en aprietos a Pedro Sánchez. Los socialistas, eso sí, se muestran dispuestos a estudiar algunas iniciativas. Es decir, asumen entrar en una revisión «blanda» del Estatuto que reconozca la incorporación de nuevos derechos sociales y un mayor blindaje competencial. Incluso a asumir el reconocimiento de Euskadi como nación siempre y cuando esta in-

clusión no implique una fragmentación del concepto de soberanía española ni entre en el tabú: el derecho a decidir. La madre del cordero.

Vientos desfavorables

PNV y EH Bildu saben que los vientos no son favorables para meter el turbo. Pero quieren aprovechar la relación de fuerzas actual en España —la minoría de Sánchez y su dependencia de los aliados nacionalistas— antes de que las cosas se pongan más complicadas con un regreso de la derecha al poder. El gancho de la plurinacionalidad de España, aceptada ahora por la dirección del PSOE, se ha convertido en un nuevo puente que puede unir las diferentes sensibilidades ideológicas.

El PNV tiene un compromiso con el PSE para alumbrar un nuevo pacto estatutario. El empeño jeltzale pasa por ampliar el consenso del Estatuto en 1979, que no concitó el apoyo de la izquierda abertzale. El sueño del PNV —la filigrana— pasaría por lograr el aval de la izquierda independentista, que ahora es bastante más posibilista y se ha alejado de su histórico rupturismo. Y, a la vez, mantener al apoyo del PSE. Las próximas semanas serán decisivas para despejar el dilema.

El PSN valora la «relación» con Bildu pero le pide más pasos

A. S.

SAN SEBASTIÁN. El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, que a su vez es portavoz de este partido en el Parlamento foral, puso ayer en valor la «buena relación» y el diálogo que su formación mantiene con EH Bildu, y que permite a la socialista

María Chivite gobernar en minoría así como al soberanista Joseba Asiron recuperar la Alcaldía de Pamplona. No obstante, a pesar de la sintonía en «cuestiones sociales» que el dirigente del PSN observa con EH Bildu, el líder socialista pidió a la coalición independentista más pasos en relación al futuro de la convivencia y

le volvió a exigir que condene el terrorismo de ETA. En ese sentido, censuró el «enalticimiento del terrorismo» que se ha registrado en algunos municipios de Navarra en las fiestas de este verano.

En una entrevista en Radio Euskadi, Alzórriz se mostró asimismo muy severo frente a Unión del Pueblo Navarro y criticó con dureza a su nueva presidenta, Cristina Ibarrola, con la que, según precisó, «apenas se saluda» en el Parlamento foral. Lamentó en ese sentido su «prepotencia y altane-

ria», su incapacidad para alcanzar acuerdos con el PSN y con otros grupos políticos y por alentar las políticas de confrontación y las dinámicas de choque identitario que los socialistas han intentado apagar en la Comunidad foral. El socialista de Organización del PSN también aplaudió el pacto para la financiación para Cataluña alcanzado entre el PSC y Esquerra Republicana, y desmintió que suponga una merma del Convenio navarro, cuyo anclaje en la Constitución puso de relieve.